

## EL CATÁLOGO DE BIENES MUEBLES. REGISTRO, CONOCIMIENTO Y TUTELA

Alfredo J. Morales  
*Universidad de Sevilla*

Transcurrido casi un siglo desde la promulgación del Real Decreto por el que se ordenaba la “catalogación completa y ordenada de las riquezas históricas o artísticas” de España, sería de esperar que dicha tarea hubiera sido concluida en sus aspectos esenciales (1). Sin embargo, la realidad es bien distinta, siendo mucho el trabajo que aún queda por hacer. Y ello no debe entenderse al hilo del nuevo concepto de la catalogación del patrimonio histórico como una tarea sin posible final, en la línea de lo manifestado por Ferrari en relación con los bienes culturales italianos, sino porque la normativa antes citada y la surgida posteriormente con la misma intención, tuvo escasa efectividad (2). Por otra parte, no era la primera vez que el tema del catálogo del patrimonio histórico español se convertía en materia legislativa, si bien la repercusión de tales preceptos, anteriores en el tiempo, fue aún menor. No obstante y a pesar de todo lo indicado, varios trabajos de catalogación se emprendieron en razón de tales normativas. A efectuar una sencilla enumeración de los mismos, a analizar la evolución de la legislación correspondiente y a resaltar la falta de una concepción general sobre la tarea administrativa de inventariar, se dedican estas páginas (3).

Puede considerarse la Real Cédula de 26 de marzo de 1802 como la primera aproximación legislativa española al concepto de catálogo del patrimonio cultural (4). Dicha norma, relativa al modo de recoger y conservar los monumentos, en realidad no establece la necesidad de proceder a la catalogación como medida de protección efectiva del patrimonio. No obstante, el

hecho de obligar a comunicar a la Real Academia de la Historia los hallazgos de antigüedades y de responsabilizar a dicha institución de la inspección de los mismos, es ya un primer intento por lograr un sistema operativo de protección del patrimonio. En la citada instrucción es de destacar el concepto de antigüedad que se utiliza, reflejo de la mentalidad ilustrada de la época. Dice así:

“Por monumentos antiguos se deben entender las estatuas, bustos y baxos relieves, de cualesquiera materias que sean; templos, sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, naumaquias, puestas, baños, calzadas, caminos, aqueductos, lapidas o inscripciones, mosaycos, monedas de qualquier clase, camafeos, trozos de arquitectura, columnas miliarias; instrumentos musicos, como sistros, liras, crotalos; sagrados, como prefericulos, simpulos, lituos, cuchillos sacrificatorios, segures, aspersorios, vasos tripodes; armas de todas especies, como arcos, flechas, glandes, carcaxes, escudos; civiles, como balanzas y sus pesas, romanas, relojes solares o maquinales, armilas, collares, coronas, anillos, sellos; toda suerte de utensilios, instrumentos de artes liberales y mecánicas; y finalmente cualesquiera cosas aun desconocidas, reputadas por antiguas, ya sean Punicas, Romanas, Cristianas, ya Godas, Arabes y de la baxa edad” (5).

Se trata de una larga enumeración, de rico y preciso vocabulario, en la que se intenta recoger todo el patrimonio, tanto mueble como inmueble, a partir de un solo criterio uniformador, el cronológico. Por consiguiente, en la aplicación

de dicha instrucción no se distingue entre las peculiaridades de los diferentes tipos de bienes culturales, advirtiéndose, a la vez, un concepto bastante vago de patrimonio. Además, la elaboración de ese extenso listado no supone el establecimiento de ningún tipo de medida de protección para los bienes incluidos en el mismo. De hecho, se trata de obtener un registro de las piezas, cuya única finalidad es la de conocer su existencia.

Pocos años después de publicarse la citada instrucción, vivió el país uno de los episodios más tristes y nefastos de la historia de su patrimonio cultural. La presencia de las tropas napoleónicas y el expolio que éstas ejercieron sobre el mismo, así como la posterior Guerra de la Independencia, ocasionaron pérdidas cuantiosas e irreparables en el mismo (6). Pero, contrariamente a lo que cabría esperar, tales acontecimientos no dieron lugar a ninguna iniciativa de catalogación, encaminada al conocimiento y subsiguiente protección del patrimonio que se había salvado. Se realizaron, eso sí, inventarios destinados a recoger las piezas objeto de saqueo y desaparecidas, pero más para dejar lamentable constancia de su pérdida que para exigir su restitución y obligar a su devolución (7). Ni siquiera los nuevos avatares vividos por el patrimonio histórico español tras la Desamortización de 1835, propiciaron la asunción inmediata de alguna medida de tal índole. Se promulgó, eso sí, el 8 de abril de 1837 una Real Orden prohibiendo la exportación de libros, pinturas y manuscritos antiguos, ley cuyo texto venía a reiterar normativas precedentes, algunas promulgadas incluso en el siglo anterior. Tal es el caso de la Real Orden Circular de 16 de octubre de 1779 por la que se prohibía la extracción de pinturas y otros objetos artísticos antiguos o de autores ya fallecidos, así como su salida a las “provincias de ultramar”, sin expresa Real Orden de autorización.

Como un nuevo paso hacia la elaboración de un catálogo, aunque limitado al ámbito de los inmuebles, hay que considerar la Real Orden de 3 de mayo de 1840, por la que se exigía a las autoridades provinciales la remisión de noticia de los templos en que existiesen “sepulcros que por serlo de reyes o personajes célebres o por belleza y mérito de su construcción, merezcan

conservarse cuidadosamente, entendiéndose lo mismo respecto de cualquier otro monumento no cinerario que sea digno de conservar”. A pesar de estar limitada su aplicación al terreno de los monumentos, es importante destacar que el criterio que sustenta dicha norma no es el cronológico, antes en uso, sino el mérito de las piezas ó, lo que es igual, su valor artístico. Desgraciadamente, se trató de una ley con escaso éxito, producto de un impulso coyuntural, que no tuvo continuación práctica. Por otra parte, dicha Real Orden vendría a marcar el inicio de una mayor atención legislativa hacia los bienes inmuebles y su protección, en detrimento de los bienes muebles, tendencia que no es exclusiva de nuestro país, pero que aquí posiblemente se manifieste con mayor agudeza.

Por Real Decreto de 13 de junio de 1844 se crearon las Comisiones Provinciales de Monumentos, encomendándose a las mismas el recabar información de todos los edificios, monumentos y antigüedades existentes en su demarcación territorial y que mereciesen ser conservados. A su vez se les encargó “formar catálogos, descripciones y dibujos de los monumentos y antigüedades que no sean susceptibles de traslación, o que deban quedar donde existen, y también de las preciosidades artísticas que por hallarse en edificios que convenga enajenar o que no puedan conservarse merezcan ser transmitidas en esta forma a la posteridad”. Aunque resulta evidente que se trataba de una medida encaminada a la documentación de bienes en peligro de desaparición, es, pese a ello, una muestra del interés por la catalogación del patrimonio. Al respecto, es de destacar la alusión a la elaboración de un material gráfico adecuado -dibujos- para acompañar los repertorios. Desde entonces, las imágenes serán elemento consustancial a los catálogos, si bien la incorporación a los mismos de los nuevos avances técnicos, caso de la fotografía, se efectuará con cierto retraso.

Similares términos a los expuestos ofrece el nuevo reglamento de las Comisiones de Monumentos del año 1865. Si bien en este caso tampoco siguió, a la expresada necesidad de la catalogación, el establecimiento de unas medidas de protección. Por lo tanto, dichas instrucciones reglamentarias deben interpretarse como

instrucciones bienintencionadas, pero con escasa efectividad.

La primera medida legal encaminada a la obtención de un catálogo completo del patrimonio histórico español, coincide con los albores de un nuevo siglo. Se trata del Real Decreto de 1 de junio de 1900 mandando “la catalogación completa y ordenada de las riquezas históricas de la nación”. Su promulgación fue obra de Juan Facundo Riaño, Director General del Ministerio de Instrucción Pública y personaje clave de nuestro país en la implantación de la Historia del Arte como disciplina académica. Figura de sólida y amplísima formación, especialista en artes industriales y auténtico jalón de la historiografía moderna española, desempeñó un papel destacadísimo en un acontecimiento cultural de la época de la Restauración, la exposición de arte hispanoamericano, con motivo de la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América. A instancias suyas se llamó a Granada a Manuel Gómez-Moreno, con objeto de que emprendiese la formación del mencionado catálogo del patrimonio histórico español. Según el articulado de dicho decreto, el trabajo se efectuaría “por provincias, no pasando de una a otra sin que esté completamente terminado el Catálogo histórico y artístico de aquella en que se haya comenzado la investigación” (8).

El trabajo desarrollado por Gómez-Moreno entre los años 1901 y 1903 se concretó en la elaboración de los catálogos de Avila, León, Zamora y Salamanca (9). Durante el transcurso de su labor, se publicó el Real Decreto de 14 de febrero de 1902 ordenando la continuación en formar el Inventario General de Monumentos Histórico-Artísticos y otro separado por cada provincia (10). En su artículo 9º se dice: “Los inventarios comprenderán, además de la descripción y estudio crítico, una breve noticia histórica de los Monumentos, para lo cual los comisionados deberán examinar cuidadosamente los documentos impresos o manuscritos, en particular los que se conservan en los Archivos nacionales Municipales, eclesiásticos y particulares. La descripción de los Monumentos se presentará ilustrada con planos, dibujos y fotografías de las que por su novedad e importancia lo requieran”. De dicho texto es de destacar la relevancia

otorgada a las imágenes - ya se citan expresamente las fotográficas-, para la documentación de las obras reseñadas.

Habida cuenta la lentitud del trabajo de catalogación y las críticas que se habían producido por habérselo encomendado en exclusiva a Gómez-Moreno, se decidió dividir el encargo entre diversos profesionales. Con ello se ganó en celeridad lo que se perdía en rigor. De hecho, la dispersión llevó aparejada una tremenda desigualdad de criterios en la recopilación de datos, producto de la dispar cualificación e interés por el tema de las personas a quienes se encomendó. Así lo ponía de manifiesto, a la par que lamentaba la oportunidad que se había desaprovechado, Leopoldo Torre Balbás, durante la celebración del VIII Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en Zaragoza en 1919 (11). Además de inconcluso, el trabajo resultó desequilibrado, no sirviendo para los objetivos que se le habían asignado, pues en su mayor parte quedó inédito, por más que el artículo 14 del Real Decreto establecía que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes procedería a su publicación. Con la misma pretensión surgió la Real Orden de 20 de marzo de 1911, disponiendo la aparición en forma abreviada de los Catálogos provinciales de Monumentos Artísticos e Históricos. En su texto se pone de relieve la importancia de formar dichos catálogos, así como la necesidad de publicarlos, pues “si después de formados se archivan, en vez de ser obra útil para la cultura pública se reducirá(n) a documentos de curiosidad para personalidades privilegiadas”. A pesar de ello, la mayor parte de tales trabajos nunca vieron la luz pública. En la actualidad estos catálogos se encuentran depositados en el Instituto Diego Velázquez, perteneciente al Centro de Estudios Históricos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (12).

La promulgación de la Ley de Conservación de Monumentos Histórico-Artísticos, de 4 de marzo de 1915, inaugura una nueva mecánica sobre la protección y conservación del patrimonio, basada en el acto administrativo de su inclusión en un catálogo. Tal sistema, que se mantendrá en la legislación posterior, coexiste con la elaboración del inventario general del país, tarea que aún proseguía. Una Real Orden

de 16 de febrero de 1916 trata de la regulación de los catálogos provinciales de monumentos y de los plazos en que dichos trabajos deben ser entregados. Sobre la normalización de los mismos, en cuanto al material que debe ser elaborado por los correspondientes redactores, versa el Real Decreto de 23 de julio de 1919. En este mismo año, concretamente el 10 de octubre, se crea el cargo de Delegado Provincial de Bellas Artes, entre cuyas funciones se citan el desarrollo de “los trabajos necesarios para la formación del Inventario Artístico de la provincia”. Todas estas normas y textos legales, si bien manifiestan una clara preocupación por llegar a conocer la riqueza artística de la nación, tuvieron escasa efectividad, pues nunca se acompañaron de los recursos suficientes para ponerlos en práctica.

Este hecho, unido a la falta de competencia de algunos de los redactores del catálogo monumental y a los avances producidos en el conocimiento del patrimonio cultural español, hizo que el 14 de febrero de 1922 se dictara un Real Decreto sobre la revisión del mismo. Dicha labor, que sería desarrollada por miembros de las Reales Academias, comprendería “la parte gráfica de cada catálogo y su redacción, debiendo determinar el informe en esta labor crítica concretamente las omisiones que, a juicio de la Comisión, sea indispensable subsanar y los nuevos datos que juzgue conveniente añadir” (13).

El Real Decreto de 9 de agosto de 1926 sobre protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza artística, parte del reconocimiento de la ineficacia de la legislación precedente: “De poco han servido, señor, las leyes anteriores; no han tenido eficacia sus preceptos, que es tan grande nuestro acervo artístico nacional, tan rico en monumentos, y sus riquezas tan diseminadas por la prodigiosa fecundidad artística de nuestros mayores, que de atenernos a los preceptos y al espíritu dominante en aquellas leyes no bastaría el presupuesto entero del Estado si nuestro tesoro artístico nacional hubiera de ser rescatado y custodiado como es debido y merece”. Por ello estima necesaria una “intervención directa y eficaz del Estado”, que pretenda llevar a cabo mediante una serie de preceptos relativos a la conservación y custodia del patrimonio y a través de unas normas sobre la

exportación y comercio. El Título Tercero de dicho decreto se dedica a los bienes muebles, estableciéndose la necesidad de que los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales “y en general toda administración o representante legal de entidad colectiva reconocida” formen un catálogo de los mismos, como medida de protección. Se trata, pues, de aplicar una normativa similar a la establecida para los inmuebles en la ley de 1915. En cumplimiento de varios de los preceptos establecidos en dicho decreto, en 1929 se encomienda a Elías Tormo y Manuel Gómez-Moreno, en representación de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes, la elaboración de un avance del Inventario del Tesoro Artístico Nacional. A la Comisión Revisora que ambos integran se hace responsable, por Real Decreto de 15 de mayo de 1930, de los trabajos conducentes a la formación de dicho inventario del patrimonio de la nación, decidiendo aquella encomendar la tarea al Instituto de Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de Madrid.

La extraordinaria labor de dinamización de la vida cultural española y de fomento de los contactos con el exterior desarrollada por la Junta de Ampliación de Estudios, creada en 1907, alcanza uno de sus momentos cumbre a partir del Real Decreto de 13 de julio de 1931, por el que se encomienda al Centro de Estudios Históricos, de ella dependiente, la formación del Fichero de Arte Antiguo (14). Responsables del trabajo eran las Secciones de Arte y Arqueología del Centro, consistiendo el mismo en el “inventario de las obras de arte que existen en el territorio nacional anteriores a 1850”. La limitación cronológica señalada, que vuelve sobre algún aspecto de la legislación decimonónica, en la que el criterio de valoración era el de antigüedad, restó posibilidades para la obtención de un inventario adecuado y exhaustivo del patrimonio. No obstante, es indiscutible que con la elaboración del Fichero se pretendía dotar a la Administración de un instrumento ágil y completo, en el que se coordinase toda la información existente sobre los bienes muebles. De hecho, en el artículo 3º se especifica que la consulta del Fichero “será preceptiva, en caso de expediente, sobre destrucción o ruina, venta indebida o exportación clandestina de Monumentos u objetos artísticos en el que no figuren

fotografías y datos suficientes para identificarlo o para tener idea exacta de su importancia". Dicho texto, así como otros párrafos del articulado, muestran una clara evolución conceptual al estimar el inventario no como un fin en sí mismo, es decir como simple registro de los bienes integrantes del patrimonio de la nación, sino como un instrumento operativo, que posibilita el conocimiento, la protección y la tutela de los mismos.

Por otra parte, dichas Secciones del Centro de Estudios Históricos deberían elaborar un fichero especial de las obras de arte de importancia destruidas o exportadas desde 1875. Así mismo, deberían poner al día los catálogos monumentales ya terminados y completar los deficientes (15). Tales encargos prueban una clara preocupación por la actualización informativa, conforme a un criterio de evidente modernidad.

El mismo carácter progresista e innovador se advierte en la Ley de Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933. En ella se presta especial atención a la catalogación de los bienes culturales. Así, en su artículo 3º se refiere al Catálogo de Monumentos histórico-artísticos, mientras se dedica todo el Título Quinto al "Inventario del Patrimonio Artístico Nacional". En su primer artículo se ordena emprender dicho trabajo, sirviendo de base para ello "los Catálogos Monumentales y el Fichero de Arte Antiguo", a la vez que se imponen obligaciones muy estrictas a los poseedores de objetos de interés, a efectos de catalogación. Posteriormente se indica que las relaciones "que se ilustrarán con fotografías, dibujos, etc., y se acompañarán con Catálogo, guías, estudios, etc, siempre que sea posible habrán de ser minuciosas y completas, depurándose responsabilidades si se comprobasen ocultaciones y engaños". Por Decreto de 16 de abril de 1936 se promulga el Reglamento de la mencionada ley, regulándose entonces la elaboración de los Catálogos Monumentales, estableciéndose la figura de los catálogos complementarios con medidas cautelares, y reglamentándose la formación del Inventario del Patrimonio Artístico y la difusión de la cultura artística.

La anterior ley, reformada y completada con otras disposiciones, seguirá vigente tras la gue-

rra civil, por más que el régimen político vencedor respondiese a una orientación radicalmente contraria a la que la había inspirado. Fueron precisamente las nefastas consecuencias de dicha contienda sobre el patrimonio histórico - desaparición de numerosísimos bienes indocumentados-, las causantes de que alguna Junta Conservadora del Tesoro Artístico decidiese emprender la formación del Catálogo Monumental del territorio de su jurisdicción. Entre ellas cabe destacar el que se emprendió en la provincia de Sevilla, por el organismo heredero de la mencionada institución. En la elaboración del mismo se retomó la filosofía del Real Decreto de 1 de junio de 1900, sobre la catalogación de las riquezas de la nación, y del Real Decreto de 14 de febrero de 1902, sobre el Inventario General de Monumentos Histórico-Artísticos. Así, el **Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla** siguió en su confección un criterio topográfico y alfabético, a la vez que se entendió como una investigación, que llevaba implícita la localización y consulta de fuentes documentales inéditas. Por otra parte, el trabajo se acompañó de un abundante repertorio gráfico, integrado por planos, dibujos y fotografías. Pero, como tantas otras iniciativas similares, algunas ya aludidas, la tarea no fue completada, apareciendo tan sólo cuatro volúmenes que alcanzaron hasta la letra "h" (16). Aun así, es indiscutible la importancia y el mérito de la labor realizada. Entre sus virtudes se cuenta el haber servido de modelo en la formación de los Catálogos Monumentales de otras provincias españolas (17).

A pesar del interés que, en esos momentos, algunos organismos de la administración, tanto regionales como provinciales, demostraron por la confección de los Catálogos, la realidad es que los proyectos no se llevaron a cabo. Se desaprovechó, pues, otra oportunidad para contar con tan imprescindible instrumento. Con objeto de dar una nueva orientación a la elaboración de los mismos y con el propósito de unificar los criterios, poniendo fin a la ineficacia del sistema hasta entonces seguido, por Decreto de 9 de marzo de 1940 se encomendó el Catálogo Monumental al Instituto Diego Velázquez, integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, señalándose como instrumento fun-

damental para el mismo el Fichero de Arte Antiguo. Por otro Decreto de 19 de abril de 1941, se incorporó dicho Fichero al mencionado Instituto y se dictaron normas complementarias para la elaboración del Catálogo Monumental del país. Ambos Decretos significaron la escisión entre catalogación y protección, por lo que todas las iniciativas que se emprendieron con posterioridad, en uno u otro aspecto, carecieron de la necesaria unidad de criterios para dotarlas de efectividad (18). La propia administración pareció reconocer la falta de operatividad del sistema con la promulgación del Decreto de 12 de junio de 1953, atribuyendo al Ministerio de Educación Nacional la responsabilidad de la elaboración del Inventario General del Tesoro Artístico Nacional. En el mismo texto legal se establecen las características de dicho trabajo, los métodos a seguir, las obligaciones de los propietarios de bienes de valor histórico-artístico y la organización administrativa necesaria para realizar el trabajo. No obstante los buenos deseos expresados en el Decreto, del mismo sólo se obtuvieron pocos resultados.

Un nuevo intento por lograr la definitiva formalización del mencionado Inventario General se produjo al crearse, por Decreto de 22 de septiembre de 1961, el Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica. Este se hacía depender de la Dirección General de Bellas Artes, con el fin de convertirse en el “servicio capaz de tener al día cuanto se refiere al inventario de nuestra riqueza monumental, artística y arqueológica, así como cuanto afecte a la redacción y ordenación de índices, catálogos y registros, dispuestos de tal forma que con seguridad, eficacia y rapidez puedan facilitar a los órganos del Gobierno y a los estudiosos cuanta información necesiten en estos aspectos” (19). Esta iniciativa fructificó en la formación de numerosos Inventarios, que si bien aportaron datos sobre los inmuebles, se centraron, de manera especial, en los bienes muebles, precisamente los más abandonados y desconocidos del patrimonio cultural español. Para la redacción de aquéllos se contó, fundamentalmente, con profesores universitarios, si bien tampoco faltó la colaboración de otros profesionales vinculados a instituciones culturales. El trabajo siguió la división en provincias del Estado, tomándose los

partidos judiciales como referencia geográfica dentro de las mismas. El Inventario consistía en la cumplimentación de unas sencillas fichas y en la redacción de un texto, correspondiente a las mismas, cuyo objeto era la posterior publicación. Para la formación de aquél se partía de unas directrices normalizadoras, referentes a la identificación del bien, a su localización en el edificio, del que se debía aportar un plano esquemático, a su estado de conservación y a su reproducción fotográfica.

El proceso iniciado con la creación del citado Servicio, que después pasó a ser Centro Nacional, aún proseguía cuando se promulgó la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio de 1985 (20). En ella se indica que los “bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural”, señalando el Título III sobre los bienes muebles que la “Administración del Estado, en colaboración con las demás Administraciones competentes, confeccionará el Inventario General de aquellos bienes muebles del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural que tengan singular relevancia”. Si bien ello demuestra la preocupación legislativa por la necesidad de inventariar el patrimonio, se hace desde la distinción entre sus diferentes tipos y estableciendo grados en la protección del mismo. Tal situación, que recuerda sistemas establecidos en normativas anteriores, puede restar eficacia a la, por otra parte, tan importante ley.

La aprobación de la misma coincidió con la puesta en marcha del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, del Ministerio de Cultura, creado el 24 de abril del mismo año, en cuyo Departamento de Información e Investigación quedó integrado el citado Centro Nacional. Se producía todo ello con la culminación del proceso de transferencias en materia de cultura a las Comunidades Autónomas, conforme a la nueva configuración del Estado. Ello vino a significar que un nuevo Departamento ministerial, la Subdirección General de Protección del Patrimonio, procurara coordinar y normalizar la catalogación de los bienes culturales, labor que habían asumido los diferentes gobiernos autónomos. Desde bien pronto éstos pasaron a diseñar sus propias estrategias en dicho



campo -algunas Comunidades promulgaron leyes propias sobre el patrimonio histórico-, en la búsqueda de una mayor operatividad y eficacia, con objeto de rentabilizar los esfuerzos y de sentar las bases de su programas de tutela de los bienes culturales. Todo ello no ha impedido que Inventarios encargados y efectuados para el antiguo Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica hayan continuado publicándose, si bien con un carácter casi testimonial y volviendo al antiguo concepto de registro y conocimiento que antaño impulsó tales trabajo.

Por todo lo últimamente expuesto, se ha abierto una nueva etapa en la catalogación del patrimonio histórico español, que está dando ya

sus primeros frutos. Gracias a los avances obtenidos mediante la incorporación de la informática, herramienta indispensable y de resultados sorprendentes, se puede conseguir hoy que dicho trabajo sea realmente operativo. A través de la misma se está en condiciones de lograr que el Catálogo, entendido como sistema permanente de documentación y conocimiento de los bienes culturales, se convierta, por fin, en el más firme apoyo de la gestión y tutela de los bienes culturales. Y todo ello cuando se avanza hacia una nueva concepción del patrimonio histórico en su relación con el territorio, tendente a evaluar los factores de riesgo que sobre el mismo se ciernen, con objeto de posibilitar su conservación preventiva y de potenciar su difusión.

## NOTAS

1. Real Decreto de 1 de junio de 1900. Gaceta de 2 de junio de 1900.

2. Véase FERRARI, Oreste: "La catalogazione. Innovazione di un processo permanente". **Memorabilia: il futuro della memoria. 1. Tutela e valorizzazione oggi**. Roma-Bari, 1987. Págs. 327-331. Dicho texto es básico para entender la nueva mentalidad sobre el sentido y el valor de la catalogación del patrimonio cultural y las razones por las que dicho trabajo difícilmente podrá entenderse alguna vez como concluido.

3. Una aproximación al tema, aunque con distinta finalidad, fue realizada por PEREDA ALONSO, Araceli: "Los Inventarios del Patrimonio Histórico-Artístico Español". **Análisis e Investigaciones**. n.º9. 1981.

4. Para algunos autores el primer atisbo de un catálogo general del patrimonio histórico español corresponde a la monumental obra de PONZ, Antonio: **Viaje de España, ...** Madrid, 1772-1794 (18 v.).

5. "Instrucción sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos, que se descubran en el Reyno, baxo la inspección de la Real Academia de la Historia". **Novísima Recopilación de las Leyes de España**. Libro VIII. Título XX. Ley III. Madrid, 1803.

6. Al respecto pueden consultarse SALTILLO, Miguel Lasso de la Vega, marqués de: **Mr. Frédéric Quilliet comisario de bellas artes del gobierno intruso 1809-1814**. Madrid, 1933. Asimismo, LIPSCHUTZ, Ilse Hempel: "El despojo de obras de arte en España durante la Guerra de la Independencia". **Arte Español**. 3.º Trimestre, 1961. Págs. 215-270. De la misma autora, **La pintura española y los románticos franceses**. Madrid, 1988.

7. Sirva de ejemplo la interesante y reveladora obra de GÓMEZ IMAZ, M.: **Inventario de los cuadros sustraídos por el gobierno intruso en Sevilla (año 1810)**. Sevilla, 1896.

8. Artículo 2.º. Real Decreto de 1 de junio de 1900. Gaceta de 2 de junio de 1900.

9. De ellos, el segundo fue publicado en 1925, el tercero en 1927 y el último en 1967. La edición de éste fue posible gracias al empeño de Gratimiano Nieto Gallo, Director General de Bellas Artes, quien prologa la obra y analiza las vicisitudes del trabajo de Gómez-Moreno y la formación del Catálogo Monumental de España. El primero de los catálogos no ha visto la luz hasta 1983.

10. Gaceta de 18 de Febrero de 1902.

11. "Concedidos los de las 49 provincias españolas y entregados casi todos, al lado de unos cuantos hechos

por personas competentes, la mayoría son obra de periodistas y amigos de políticos desconocedores en absoluto de nuestro arte antiguo, a los que se les concedió el favor oficial con la complicidad de una comisión que piadosamente deseamos creer incompetente". La cita procede de MUÑOZ COSME, Alfonso: **La conservación del patrimonio arquitectónico español**. Madrid, 1989. Pág. 27. En los mismos términos se expresaba Gratiano Nieto: "...se encargó la redacción de Catálogos de otras provincias, unas veces a personas solventes científicamente, pero las más a amigos políticos sin competencia ni preparación, lo que dio lugar a que la mayor parte de los volúmenes redactados no pudieran ser aprovechados". Cfr. NIETO GALLO, Gratiano: Prólogo a GÓMEZ-MORENO, Manuel: **Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca**. Madrid, 1967. Págs. XV y XVI.

12. La relación de los mismos, con sus autores, fecha de encargo e indicación de los publicados, figura en el apéndice del trabajo de Pereda, anteriormente aludido. PEREDA ALONSO, Araceli: Op. Cit. Págs. 39-40.

13. Real Decreto de 24 de febrero de 1922, sobre revisión del Catálogo Monumental de España. Gaceta de 25 de febrero de 1922.

14. Sobre dichos centros puede consultarse SUBIRÁ, J.: **La Junta de Ampliación de Estudios**. Madrid, 1924 y VERLINDEN, Ch.: "Le Centro de Estudios Históricos de Madrid", en *Revue di cercle de la Fondation Universitaire*. N.º 3, 1935. Págs. 1-14, respectivamente.

15. Artículos 5º y 7º. Real Decreto de 13 de julio de 1931 creando el Fichero de Arte Antiguo en el Centro de Estudios Históricos. Gaceta de 14 de febrero de 1931.

16. El trabajo fue realizado por HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN Y DELORME, Francisco. La edición fue patrocinada por la Diputación Provincial, habiendo sido publicado los tomos I (A-B), Sevilla, 1939; II (C), Sevilla, 1943; III (D-EC), Sevilla, 1951 y IV (ES-H), Sevilla, 1955.

17. Así ocurre con el frustrado proyecto de Catálogo de la Provincia de Huelva, patrocinado por la Diputación Provincial e iniciado en 1974. El trabajo fue llevado a cabo por BENDALA GALÁN, Manuel; COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio; FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro y JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, habiéndose publicado un solo tomo **Almonaster la Real**. Huelva, 1991.

Criterios similares a los empleados en el Catálogo de Sevilla se han seguido en el correspondiente a Córdoba, aún en curso de elaboración. Hasta el momento

han aparecido los seis volúmenes siguientes: ORTIZ JUAREZ, Dionisio; BERNIER LUQUE, Juan; NIETO CUMPLIDO, Manuel y LARA ARREBOLA, Francisco: **Catálogo Artístico y Monumental de la Provincia de Córdoba**. Tomo I, Adamuz-Bujalance. Córdoba, 1981. De los mismos autores: Tomo II, Cabra-El Carpio, Córdoba, 1983; Tomo III, Castro del Río-Fuente la Lancha, Córdoba, 1985; Tomo IV, Fuente Obejuna-Hornachuelos, Córdoba, 1986. BERNIER LUQUE, Juan; NIETO CUMPLIDO, Manuel; RIVAS CARMONA, Jesús; LOPEZ SALAMANCA, Manuel; ORTIZ JUAREZ, Dionisio y LARA ARREBOLA, Francisco: **Catálogo Artístico y Monumental de la Provincia de Córdoba**. Tomo V, Iznájar-Lucena. Córdoba, 1987. BERNIER LUQUE, Juan; NIETO CUMPLIDO, Manuel; RIVAS CARMONA, Jesús; LOPEZ SALAMANCA, Francisco; JIMÉNEZ Povedano, Juan; NARANJO RAMÍREZ, José; RAMÍREZ LAGUNA, Arturo y Asociación "Amigos de Montilla": **Catálogo Artístico y Monumental de la Provincia de Córdoba**. Tomo VI, Luque-Montalbán-Montemayor-Montilla. Córdoba, 1993.

En la misma línea se inscribe la formación, a punto de concluir, del Catálogo de Navarra, en el que, no obstante, se ha seguido como criterio territorial el de las merindades. Del mismo han aparecido siete tomos, estando en prensa el octavo y concluyéndose la elaboración del noveno y último. Aquellos son los siguientes: GARCÍA GAINZA, M. C.; HEREDIA MORENO, M. C.; RIVAS CARMONA, J. y ORBE SIVATTE, M.: **Catálogo Monumental de Navarra. I Merindad de Tudela**. Pamplona, 1980. De los mismos autores **Catálogo Monumental de Navarra. II \* Merindad de Estella**. Estella, 1982; De los mismos autores **Catálogo Monumental de Navarra. II \*\* Merindad de Estella**. Estella, 1983; **Catálogo Monumental de Navarra. III Merindad de Olite**. Pamplona, 1985; GARCÍA GAINZA, M.C. y ORBE SIVATTE, M.: **Catálogo Monumental de Navarra. IV \* Merindad de Sangüesa**. Pamplona, 1989; GARCÍA GAINZA, M. C.; ORBE SIVATTE, M. Y DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTÍN, A.: **Catálogo Monumental de Navarra. IV \*\* Merindad de Sangüesa**. Pamplona, 1992; GARCÍA GAINZA, M.C.; ORBE SIVATTE, M.; DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTÍN, A. y AZANZA LÓPEZ, J. J.: **Catálogo Monumental de Navarra. V \* Merindad de Pamplona**. Pamplona, 1994.

18. Véase MUÑOZ COSME, Alfonso: Op. Cit. Pág. 28.

19. Decreto 1938/1961, de 22 de Septiembre. Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica. Creación. B.O.E. de 24 de octubre de 1961.

20. B.O.E. n.º 155, de 29 de junio de 1985. Corrección de erratas en B.O.E. n.º 296, de 11 de diciembre.